ECONSTOR
Make Your Publications Visible.

A Service of
ZBW
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

Utting, Peter; Chamorro, Amalia; Bacon, Chris

Working Paper

El rol de las cooperativas y la acción colectiva en el desarrollo y la reconciliación en Nicaragua

UNRISD Working Paper, No. 2017-4

Provided in Cooperation with:
United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva

Suggested Citation: Utting, Peter; Chamorro, Amalia; Bacon, Chris (2017) : El rol de las cooperativas y la acción colectiva en el desarrollo y la reconciliación en Nicaragua, UNRISD Working Paper, No. 2017-4, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/186088

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

WWW.ECONSTOR.EU

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

UNRISD

Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social

Documento de trabajo 2017-4

El Rol de las Cooperativas y la Acción Colectiva en el Desarrollo y la Reconciliación en Nicaragua

Peter Utting, Amalia Chamorro y Chris Bacon

Febrero 2017

UNRISD publica documentos de trabajo
para estimular el diálogo y los comentarios críticos.

Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social

El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) es un instituto autónomo dentro del sistema de las Naciones Unidas que realiza investigaciones multidisciplinarias y análisis de políticas sobre las dimensiones sociales de cuestiones contemporáneas de desarrollo. Nuestra labor consiste en velar por que la equidad social, la inclusión y la justicia sean piezas fundamentales del pensamiento, la política y la práctica del desarrollo.

UNRISD, Palais des Nations
1211 Ginebra 10, Suiza

Tel: +41 (0)22 9173020
Fax: +41 (0)22 9170650
info@unrisd.org
www.unrisd.org

Copyright © Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD)

Esta no es una publicación formal de UNRISD. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los estudios corresponde exclusivamente a su(s) autor(es), y la disponibilidad en el sitio web del Instituto (www.unrisd.org) no constituye una aprobación por parte de UNRISD de las opiniones expresadas en ellos. Ninguna publicación o distribución de estos documentos está permitida sin la autorización previa de(l) (los) autor(es), salvo para uso personal..

Indice

Acrónimos ii
Agradecimientos iii
Resumen iii
Introducción 1
El surgimiento del sector cooperativo en la Nicaragua revolucionaria 2
Las tensiones que afectaron el desarrollo cooperativo 3
La contrarreforma bajo el neoliberalismo 5
Acción colectiva y el “doble movimiento” 11
Resistencia civil y armada 12
El conflicto de Las Tunas 15
Estructurando un movimiento cooperativo 16
El surgimiento del Comercio Justo 18
“Hambre Cero”: El Bono Productivo Alimentario (BPA) 20
Conclusiones 23
Entrevistas 26
Bibliografia 26

Acrónimos

ACI	Alianza Cooperativa Internacional
ALBA	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
APT	Área de Propiedad de los Trabajadores
ATC	Asociación de Trabajadores Rurales
ARNIG	Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Galeano
BND	Banco Nacional de Desarrollo
BPA	Bono Productivo Alimentario
CAFENICA	Asociación de Pequeños Productores de Café de Nicaragua
CAPSM	Central American Peace and Solidarity Movement
CARUNA	Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional
CAS	Cooperativas Agrícolas Sandinistas
CCS	Cooperativa de Crédito y Servicio
CECOCAFEN	Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte
CENIDH	Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CIPRES	Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural Social
CLAC	Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo
CMR	Coordinadora de Mujeres Rurales
CNOR	Coordinadora Nacional De Oficiales En Retiro
CONACOOP	Consejo Nacional de Cooperativas
EEUU	Estados Unidos
ENABAS	Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos
FECAMPO	Federación de Cooperativas Campesinas
FECODESA	Federación de Cooperativas para el Desarrollo
FEDECARUNA	La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua
FEDUBONIC	Federación de Dueños de Bosques de Nicaragua
FEMUPROCAN	Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo
FENACOOP	Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales
FENIAGRO	Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FLO	Comercio Justo Internacional
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUAC	Frente Unido Andrés Castro
IEEPP	Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
INFOCOOP	Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo
INRA	Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria
MAF	Mesa Agropecuaria y Forestal
MEFCCA	Ministerio de Economia Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
MITRAB	Ministerio del Trabajo
ONG	organismos no-gubernamentales
PIB	Producto Interno Bruto
PRODECOOP	Promotora de Desarollo Cooperativo de Las Segovias
SCAA	Specialty Coffee Association of America
UCA	Unión de Cooperativas Agropecuarias
UNAG	Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua
UNAPA	Union Nacional Agropecuaria de Productores y Asociados
UNO	Unión Nacional Opositora
USA	United States of America

Agradecimientos

Este ensayo se preparó originalmente en inglés[1] para una sesión de la Conferencia de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) sobre el rol de las cooperativas en los procesos de reconstrucción post-conflicto, que se realizó en Pula, Croacia 25-28 junio, 2014. También fue un aporte a dos proyectos del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) sobre i) las potencialidades y limitaciones de la economía social y solidaria y ii) el desarrollo social en los lugares que han sufrido una guerra. Los autores agradecen a Milford Bateman y los organizadores de la conferencia de la ACI, los informantes claves en Nicaragua que fueron entrevistados y proporcionaron valiosos puntos de vista, Regina Hammond por su apoyo editorial para la versión inglesa y a Alicia Gariazzo por colaborar con la traducción del ensayo del inglés al español.

Resumen

En la actualidad, el mundo se ve afectado por la proliferación de guerras civiles en varias regiones. En algunos países como Colombia han firmado acuerdos de paz después de décadas de conflicto. En este contexto es pertinente investigar las formas como estos países reconstruyen sus economías y tejidos sociales luego de los conflictos. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de los países a los que esto les ha ocurrido?

En esta problemática, el tema del desarrollo y la reconciliación en áreas rurales es muy importante puesto que a menudo constituyen el principal escenario de las guerras civiles. Además, son sitios claves para el empleo productivo y la recuperación económica. Al mismo tiempo, las organizaciones e instituciones rurales, a nivel local, sean comunitarias, religiosas, cooperativas, gubernamentales u organismos no-gubernamentales (ONG), pueden jugar roles importantes en la reconstrucción.

Este ensayo examina el caso de Nicaragua, en particular la forma en que un amplio sector cooperativo, que emergió en los 80, se vio afectado por profundos cambios políticos, económicos y sociales y como este sector a su vez contribuyó a dichos cambios.

A fines de los años 80 y comienzos de los 90, un acuerdo de paz puso fin a diez años de guerra civil. Elecciones democráticas reemplazaron al gobierno revolucionario sandinista por una coalición de partidos de centro y derecha y la estrategia de desarrollo del país cambió su curso abruptamente. Las políticas públicas de apoyo al sector estatal y al movimiento cooperativo fueron modificadas de forma radical favoreciendo las privatizaciones, disminuyendo las funciones y servicios del Estado y liberando las fuerzas del mercado.

El proceso de reforma agraria y de conformación de un movimiento cooperativo iniciado por el gobierno Sandinista se vio seriamente impactado durante este periodo 'neoliberal', pero a menudo en formas contradictorias. Por una parte, como parte del proceso de paz, continuó la distribución de la tierra a campesinos sin tierra y organizaciones cooperativas. También, se entregó tierras a militares desmovilizados y otro personal de seguridad. Al mismo tiempo, los trabajadores de fincas y empresas agroindustriales estatales adquirieron algunos activos cuando éstas fueron privatizadas.

[1] La versión original inglesa se encuentra en: http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/64D5CC31A7852D55C1257DB1004B81DA/$file/Utting%20et%20al.pdf

Pero la era neoliberal marcó el comienzo de un proceso de descolectivización y despojos de tierras del sector cooperativo y campesino, restringiendo fuertemente el crédito y los servicios de apoyo a dichos sectores.

Los productores y trabajadores agrícolas no fueron observadores pasivos del proceso. Sus respuestas conformaban un "doble movimiento" del tipo Polanyiano, donde las fuerzas sociales reaccionan a los efectos negativos de la liberalización económica y el dominio de las fuerzas del mercado a través de diversas formas, con acciones colectivas contestatarias y la innovación social.

El ensayo se divide en tres partes. La primera describe el rápido surgimiento del movimiento cooperativo, sus fortalezas y debilidades, durante el período post-revolucionario, desde 1979 a la derrota electoral del gobierno Sandinista en 1990. La segunda, examina la accidentada trayectoria de la reforma agraria y el movimiento cooperativo durante los años neoliberales de lo 90s. Por una parte examina la contra-reforma agraria y la desmembración de numerosas cooperativas y, por otra, la continuación de la distribución de tierras a los sin tierra y el resurgimiento del movimiento cooperativo. La tercera parte analiza cuatro manifestaciones del "doble movimiento". Estas incluyen:

i. la proliferación de resistencia armada y civil a comienzos de los años 90s,
ii. la formación de cooperativas de segundo y tercer nivel,
iii. el esfuerzo por empoderar a pequeños productores de café a través del movimiento del comercio justo y la producción de calidad,
iv. los esfuerzos por reactivar las pequeñas fincas de mujeres pobres rurales y organizarlas en cooperativas o colectivos pre-cooperativos.

Las conclusiones sintetizan los principales hallazgos del estudio que son relevantes para los desafíos de la reconstrucción y reconciliación post-conflicto y de forma breve, se refiere a las implicaciones que tuvo el movimiento cooperativo después del retorno al poder del partido Sandinista (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN) en 2007.

El análisis de la reconciliación y el desarrollo post-conflicto en Nicaragua nos muestra que la "paz", en el contexto de la neoliberalización, tuvo costos, tales como una profunda crisis socio-económica que se manifestó en desempleo en gran escala, grandes despojos de tierra y proliferación de focos dispersos de conflicto armado. La principal lección política para los gobiernos embarcados en procesos de paz y reconstrucción post-conflicto parecería ser: ¡ignorar el desarrollo agrario inclusivo es peligroso! Si hay una política global de desmantelamiento y las demandas por tierra y empleo de parte de grupos o movimientos populares no se satisfacen, surgirán diversas formas de protestas incluyendo actividades delictivas, el surgimiento de nuevos conflictos violentos y la imposibilidad de gobernar de forma efectiva.

En Nicaragua, los productores y trabajadores rurales desarrollaron diferentes formas de acción colectiva para defender sus intereses. El resultado fue que el sector cooperativo jugó un papel fundamental en el proceso de reconciliación actuando como un freno parcial a la reestructuración neoliberal. El sector también contribuyó a la innovación social no sólo a través de estrategias de sobrevivencia, sino también como empoderamiento político y económico de sus miembros.

Peter Utting es Investigador Asociado Titular del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y Coordinador Internacional del Centro para la Economía Social (CES). Amalia Chamorro es Directora Ejecutiva del CES. Chris Bacon es profesor en la Universidad de Santa Clara en California y miembro fundador del CES.

Introducción

En la actualidad, el mundo se ve afectado por la proliferación de guerras civiles en varias regiones, lo que hace pertinente investigar las formas en que los países que ya las han sufrido han podido reconstruir sus economías y sus tejidos sociales después de los conflictos. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de los países a los que esto les ha ocurrido? En esta problemática, el tema del desarrollo y la reconciliación en áreas rurales es muy importante puesto que a menudo las guerras civiles se concentran allí. Además son sitios claves para el empleo productivo y la recuperación económica. Al mismo tiempo, las organizaciones e instituciones rurales, a nivel local, sean comunitarias, religiosas, cooperativas, gubernamentales u organismos no-gubernamentales (ONG), pueden jugar roles importantes en la reconstrucción.

Este documento examina el caso de Nicaragua y en particular el impacto económico y político que han experimentado las cooperativas en Nicaragua debido a la profunda transición política y económica que ha sufrido el país en las últimas cuatro décadas. Se analiza especialmente el cambio post revolucionario entre la Revolución Sandinista de los años 80s y el régimen neoliberal de los 90s y comienzos de los 2000. A fines de los 80 y comienzos de los 90 se lograron acuerdos de paz que pusieron fin a años de guerra civil; una amplia coalición de partidos (la Unión Nacional Opositora, UNO) ganó las elecciones presidenciales al Frente Sandinista y la estrategia de desarrollo del país cambió abruptamente. Se cambió la estructura productiva favoreciendo a la gran empresa privada, mediante una política masiva de privatizaciones y liberando las fuerzas del mercado, a costa de las formas cooperativas existentes, donde el Estado jugaba un papel importante en la promoción de sus economías.

Los procesos de reforma agraria y cooperativización iniciados por el gobierno sandinista sufrieron serios impactos, a menudo contradictorios. La distribución de la tierra a los campesinos y organizaciones cooperativas que carecían de ésta continuó como parte de los acuerdos de paz que se llevaron a cabo previo a las elecciones de 1990. Después de las elecciones se entregaron tierras a militares desmovilizados y a personal de seguridad estatal. Los trabajadores en las fincas y empresas agroindustriales estatales adquirieron algún patrimonio cuando parte de éstas pasó a ser gestionada por ellos mismos. Sin embargo, en términos generales, la era neoliberal de los 90 se caracterizó por impulsar un proceso de descolectivización y despojo de tierras, así como una fuerte restricción al acceso del crédito y a los servicios de apoyo de estos sectores.

Los productores y trabajadores rurales no fueron espectadores pasivos de este proceso. Su respuesta fue parte de un “doble movimiento” (Polanyi 1944), donde las fuerzas sociales reaccionan frente a los impactos negativos de la liberalización económica y la dominación de las fuerzas del mercado. En el caso de Nicaragua, la línea de acción pro-mercado del “doble movimiento” se centró no sólo en la liberalización económica sino también en la contra-reforma agraria centrada en la descolectivización y la devolución de tierras a sus anteriores dueños. La reacción de la sociedad consistió en diversas respuestas en apoyo a la causa popular por defender sus medios de vida y derechos, incluyendo acciones colectivas contestatarias e innovaciones sociales y productivas.

Este trabajo está dividido en tres partes. En primer lugar describe el rápido crecimiento del sector cooperativo destacando sus fortalezas y debilidades durante el período post revolucionario desde 1979 a la derrota electoral de los sandinistas en 1990. La Parte 2 analiza la accidentada trayectoria de la reforma agraria y el movimiento cooperativo durante la era neoliberal de los 90s, caracterizada por la contrarreforma agraria y redistribución de la tierra a los ex-combatientes. La Parte 3 se concentra en cuatro

manifestaciones del "doble movimiento". Estas incluyen i) la proliferación de la resistencia civil y armada a comienzos de los 90, ii) la formación de un movimiento cooperativo más allá del nivel local, iii) los esfuerzos para empoderar a pequeños productores cafetaleros a través del comercio justo y la "revolución de la calidad" y iv) los esfuerzos para impulsar a que pequeñas productoras rurales se organizaran en cooperativas y colectivos pre-cooperativos. La sección de conclusiones resume los principales resultados del análisis, señalando los desafíos de la reconciliación y el desarrollo post-conflicto y se refiere brevemente a las repercusiones que tuvo el regreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al poder en 2007 en el movimiento cooperativo.

El surgimiento del sector cooperativo en la Nicaragua revolucionaria

La Revolución Sandinista que derrocó el régimen somocista en 1979, trajo consigo una transformación profunda del control y la propiedad de la tierra (CIERA 1989, Enriquez 1991). Más de un cuarto de la tierra en fincas, a menudo la mejor del país, que era propiedad de "los somocistas", fue confiscada y ubicada mayoritariamente en empresas estatales y diferentes tipos de cooperativas. A comienzos de los 80, las empresas estatales y las cooperativas controlaban el 67% y el 31% de estas tierras respectivamente (ver Cuadro 1).

El compromiso del FSLN con el desarrollo cooperativo derivaba de las ideologías y prácticas socialista y sandinista. Esta última se extrajo de las prácticas del líder nacionalista revolucionario, Augusto César Sandino, quien a comienzos de los años 30 organizó a 3.000 productores en cooperativas en zonas liberadas al norte del país. Después de la revolución cubana, las políticas de ayuda norteamericana en el contexto de la Alianza para el Progreso promovieron un cierto desarrollo cooperativo como parte de la tercera vía entre desarrollo excluyente y revolución. En 1978 solamente existían 42 cooperativas con 9.000 miembros (Fitzgerald y Chamorro 1987:90). Se formaron más de 300 comunas agrarias durante la insurrección de 1978 y 1979 lo que culminó en la caída del régimen de Somoza en julio de 1979 (Núñez et al, 1995). En los primeros tres años de la revolución se conformaron alrededor de tres mil cooperativas.

Se destacaron dos tipos de cooperativas, la Cooperativas Agrícolas Sandinistas, CAS, donde se trabajaba colectivamente la tierra, y las Cooperativas de Crédito y Servicios, CCS, donde la tierra se trabajaba individualmente, pero los productores se asociaban para la obtención de crédito, asistencia técnica y acceso al mercado. Los trabajadores de algunas empresas agropecuarias estatales también formaron cooperativas bajo el nombre de "colectivos de trabajo" para trabajar algunas tierras de la empresa en temporada baja y con el apoyo de ésta. Algunos productores también se asociaron en cooperativas de "surco muerto" para trabajar pequeños espacios, no separados por cercas, dentro de una gran finca. Los miembros de las cooperativas también podían asociarse a las Tiendas Campesinas que constituyeron formas de organización para obtener y distribuir bienes de consumo e insumos para la producción.

Desde mediados de los 80, el Estado fue aumentando su apoyo al sector cooperativo y se institucionalizó por vías legales y reformas administrativas, con crédito. Se les garantizó precios de compra a los granos básicos, asistencia técnica y otros servicios. Antes de 1986, algunas fuentes estimaban que el valor agregado generado por el sector cooperativo equivalía a la quinta parte del Producto Interno Bruto (Encuentro 1987:2),

incluyendo un 35% de la producción agrícola destinada al consumo interno y 21% de la producción de agro exportación (Fitzgerald y Chamorro, 1987). Hacia el final del período post-revolucionario, el balance de la reforma agraria reveló que el sector agrícola estatal controlaba el 11,7% de las tierras agrícolas, el 14% las cooperativas (ver Cuadro 2) mientras las fincas privadas, grandes y medianas, (sobre 50 manzanas o 35 hectáreas)[2] iban perdiendo peso, desde 82,5% en 1978 a 32,8% en 1988 (CIERA 1989:292)

Las tensiones que afectaron el desarrollo cooperativo

Pese a las políticas gubernamentales claramente a favor de las cooperativas hubo tensiones y conflictos que afectaron al desarrollo del movimiento y la implementación y sostenibilidad de dichas políticas. En este sentido jugaron un rol los impactos de la guerra civil entre el régimen sandinista y los rebeldes de la "Contra" apoyados por los Estados Unidos. A medida que el conflicto fue adquiriendo intensidad en los años 80, las cooperativas se convirtieron en los principales objetivos de la Contra. Antes de 1985 se organizaron Cooperativas de Autodefensa que formaron parte del sistema de defensa del régimen sandinista (Ortega 1987:84). Se estima que durante la guerra civil 5.300 cooperados perdieron sus vidas; se destruyeron 1.300 casas y se perdieron 15.000 cabezas de ganado (Damiani 1994 citando cifras de UNAG).

La guerra civil produjo una economía de guerra y serios desequilibrios macroeconómicos que socavaron las posibilidades de expandir los créditos y mantener los servicios de apoyo al sector. El resultado fue el desabastecimiento de insumos agrícolas y bienes esenciales y la hiperinflación. Además, el gobierno impuso la fijación de precios y control sobre la distribución de ciertos productos que impactaron negativamente a algunos productores agrícolas y favorecieron a las zonas urbanas (Merlet y Maldidier 1987). Mientras el discurso político promovía a las cooperativas, el impulso principal del desarrollo agrario descansaba más en proyectos modernizadores de las empresas estatales, agrícolas y agroindustriales, y en los grandes proyectos de inversión.

El apoyo estatal a las cooperativas fue incapaz de evitar la división en la "clase" campesina. La guerra civil instaló a campesinos y productores agropecuarios en ambos lados del conflicto. Se estima que al menos la mitad de los 15.000 Contras provenía de familias campesinas (Ortega 1987:91). Unos 10.000 personas integraron las cooperativas de autodefensa y gran cantidad de jóvenes campesinos formaron parte de las milicias sandinistas. El descontento aumentó en algunos sectores de la población rural debido al servicio militar y a algunas políticas gubernamentales, como los controles de precios y las restricciones a las ventas de productos en algunas zonas, lo que fue un factor que facilitó el reclutamiento de Contras (Fauné 2014).

El apoyo estatal a las cooperativas estuvo bastante sesgado hacia formas de organización consideradas ideológicamente superiores. A las CAS no sólo se les asignó más tierras, sino mayores beneficios de varios servicios de apoyo estatal, incluido crédito, asistencia técnica, y abastecimiento de insumos y bienes de consumo. La tierra asignada a las CAS creció en cinco veces entre 1982 y 1985, de 100.000 manzanas a 600.000 (Fitzgerald y Chamorro 1987:38), en gran parte debido a la redistribución de la población desplazada por la guerra. El sesgo no sólo se debió a una perspectiva

[2] Una manzana equivale a 0.7 hectáreas o 1.74 acres.

ideológica, sino también a que una de las organizaciones más fuertes de trabajadores rurales, la Asociación de Trabajadores Rurales, ATC, fue particularmente activa en la organización de campesinos y trabajadores sin tierra en CAS. Entre 1982 y 1985, los CCS declinaron de 1.587 a 1.350. Sus miembros disminuyeron de 52.052 a 44.000 (Merlet y Maldidier 1987:68)

Para responder a los intereses de los pequeños y medianos productores individuales y organizados en CCS, el FSLN apoyó la formación, en 1981, de otra organización de masas, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). Para 1985, el 42% de los 106.000 miembros de la UNAG eran miembros de los CCS. En un comienzo la UNAG los apoyó, pero se fue inclinando más hacia los pequeños y medianos productores no asociados (ENVIO 1989, Utting 1992:230). Merlet y Maldidier (1987) plantean que la organización no apoyó la lucha de los campesinos pobres por tierra (ibid 56). Más bien su atención se concentró en temas como el crédito y los precios de los productos. La UNAG también jugó un rol significativo en la defensa de la población rural del norte y centro del país que se sentía ajena a las políticas sandinistas en el agro. Por otra parte, la UNAG hizo poco por fortalecer al movimiento cooperativo en términos de educación y organización, tanto a nivel de organizaciones de base como de federaciones (Merlet y Maldidier 1987:65). Baumeister plantea que quienes se vincularon a la formación de cooperativas en sus comienzos no provenían de organizaciones de masas sino de empleados técnicos del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y del Banco Nacional de Desarrollo (Baumeister 1998:225, INRA 1980).

Una evaluación realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) acerca de la calidad del desarrollo cooperativo de los CCS expone que la mayoría de éstos no eran en realidad verdaderas cooperativas de crédito y servicios: “Son, más bien, el resultado de la asociación de los campesinos para obtener crédito. Fuera de esto, existen muy pocos o ningún servicios colectivo. Hay, sin embargo, una cierta estructura organizativa – que es nuestro juicio el principal activo con que cuentan los CCS – y, en algunos casos… se han empezado a organizar pequeños servicios colectivos, por ejemplo, una bodega o un fondo común de ayuda mutua.” Considerando la tremenda heterogeneidad de los CCS, en términos de activos, capacidades y relaciones sociales, se puede concluir que hubo escasos intentos de promover mayor equidad en términos de acceso a recursos o a transformar las relaciones sociales de explotación (FIDA: 1987:103-104).

Desde mediados de los 80, el gobierno tuvo que lidiar con el descontento de la población rural y de los desplazados de guerra. La cantidad de tierras que controlaban las cooperativas creció en casi un 40% durante el período (Baumeister 1999:20). Hacia el final del período sandinista, había alrededor de 3.533 cooperativas agrarias de diferentes tipos con aproximadamente 83.000 socios (Núñez et al 1995:361).

“Tierra por armas” fue una consigna política clave luego de la firma de los acuerdos de paz Esquipulas IV en febrero de 1989 para terminar la guerra civil – es decir tierra para las tropas desmovilizadas y personal de defensa. Según Baumeister, 26.100 ex-combatientes y personal de defensa adquirieron 593.000 manzanas, aproximadamente el 7% de toda la tierra agropecuaria. De estos, 21.800 estaban con la Contra y 4.300 con los sandinistas (Baumeister 1999; p.20).

Los títulos de propiedad fueron un tema muy controvertido durante la reforma agraria sandinista y fuente de inestabilidad en los años 90. El gobierno comenzó a adjudicar

títulos a los miembros de las cooperativas en 1984. Estos títulos permitían el acceso al crédito, pero no eran títulos que legitimaran la propiedad, por lo tanto esta no podía ser transada en el mercado. Durante los 80, en todo el período sandinista, las cooperativas recibieron títulos de propiedad por un área de 895.000 manzanas, aproximadamente el 11% de toda la tierra en fincas y se benefició a unas 48.000 familias, aproximadamente el 16% del total de familias rurales (Baumeister 1999:20, CIERA 1989:39). Al final del período, muchos productores no sentían que eran realmente los dueños de la tierra (ENVIO 1992:23). Estas limitaciones del programa de entrega de títulos fue la base de gran parte de la inseguridad de muchos de los productores afectados, en el período siguiente de las transformaciones neoliberales. Tales limitaciones a menudo afectaban de formas contradictorias. Para algunos, los títulos no legítimos impedían las ventas de tierras de parte de los productores más vulnerables (entrevista a Orlando Núñez, 2014). Como se comentó, otros decidieron vender a precios más bajos que los de mercado.

Junto a la redistribución de la tierra, la política agraria adoptó un enfoque más flexible acerca del desarrollo cooperativo. Esto reflejaba que la dirección sandinista iba adquiriendo conciencia acerca de que el reclutamiento de campesinos por parte de la Contra en parte había sido consecuencia de haber priorizado a las CAS por sobre los CCS y sus miembros (Ortega 1987; 83-84). A fines de los 80, el Estado sandinista comenzó a liberalizar la economía para tratar los desequilibrios macroeconómicos crónicos, energizar al sector privado y la inversión extranjera y responder al descontento en el agro. El fortalecimiento y autonomía relativa de la organización de productores agropecuarios, UNAG, en parte influyó al cambio de las políticas, lo que marcó el comienzo de la estabilización económica y el ajuste estructural que, en forma parcial inicio el proceso de liberalización del mercado (Utting 1992:233).

Pese a los cambios de algunas políticas en favor de los productores agropecuarias, gran parte de la opinión pública del agro fue hostil al gobierno. Los años de guerra y la hiper-inflación llevaron a que una gran parte de la población del país se orientara a buscar un gobierno alternativo al sandinismo. Aunque el gobierno había firmado la paz con los Contra en 1989, los sandinistas fueron derrotados en las elecciones de febrero de 1990. Una amplia coalición de 14 partidos se vio como la mejor opción para mantener la paz y la estabilidad económica (con 54% de los votos). El FSLN entregó el poder pacíficamente, pero no sin antes negociar un acuerdo para la transición, con el objetivo de evitar el desmembramiento de dos instituciones claves para el sandinismo, la policía y el ejército, y asegurar un cierto grado de justicia distributiva o compensatoria para los trabajadores, productores o personal estatal del ejército y la defensa, que se vieran afectados por la compactación estatal y las privatizaciones. Durante la transición, varios miembros del partido y administradores de las empresas estatales se beneficiaron de las privatizaciones de bienes estatales y tierras de las cooperativas usando una serie de mecanismos legales, extralegales e ilegales. Daniel Ortega, el líder sandinista saliente también enfatizó la necesidad de "gobernar desde abajo" presionando al nuevo gobierno desde las bases sandinistas. (Núñez 2009:223)

La contrarreforma bajo el neoliberalismo

El nuevo gobierno se comprometió a aplicar reformas neoliberales asociadas a la estabilización macroeconómica, la disminución del tamaño del Estado, las privatizaciones, y la orientación agroexportadora de la economía. También se comprometió a devolver parte de la propiedad confiscada a sus dueños originales, los que retornaban del exilio. En este contexto, el peso relativo del Estado y el mercado, así

como las formas de producción privada y asociativa sufrieron cambios trascendentales. Pese a los acuerdos de transición y la promesa sandinista de gobernar desde abajo, gran parte del régimen se desmembró, en forma abrupta, a comienzos de los 90. Había preguntas claves como el futuro de las tierras y de los campesinos de las zonas afectadas por la reforma agraria; cómo se desenvolvería el crédito y otros servicios de apoyo a los socios de las cooperativas; y cómo se reintegrarían a la economía y la sociedad miles de combatientes desmovilizados y personal despedido del gobierno, a los cuales se les había ofrecido tierras. Puesto de otra manera ¿sobrevivirían al neoliberalismo y la contrarreforma agraria, las formas asociativas y colectivas de producción y entrega de servicios de apoyo? Y ¿cómo los socios y sus cooperativas resistirían, se adaptarían e innovarían en un contexto de desposesión e inseguridad?

La transformación agraria de los 90 fue tan dramática como la de la década previa. Descolectivización, reprivatización, invasiones de tierras, distribución de tierras y empresas estatales a los trabajadores y redistribución de tierras a los sin tierra, todo ello vino junto en un caótico mosaico. Esto sugiere que las formas con que se dieron los cambios no correspondían exactamente a lo que se podría haber esperado de una nueva política explícitamente neoliberal. Aunque muchas de las empresas estatales prácticamente desaparecieron a pocos años de la derrota electoral sandinista, redistribución significativa de tierras, favoreciendo a grupos de ex-combatientes (Contras y sandinistas) continuó llevándose a cabo. Se distribuyeron otras 2,1 millones de manzanas (como un 26% de la tierra total), principalmente a ex-trabajadores de las empresas estatales, a combatientes desmovilizados o a trabajadores estatales despedidos (Baumeister 1999:20). Entre 1990 y 1997, 44.100 personas se beneficiaron de la distribución de la tierra (ver Cuadro 2). Un tercio de esta tierra fue a cooperativas (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Tres fases de la reforma agraria (RA): Distribución de la tierra por tipo de propiedad (%)

Fases de la RA	Propiedad Estatal	Cooperativas	Individuos	Área de propiedad de los trabajadores	Total	Área (miles de mzs)
1979-84	66.7	30.9	2.4	0	100	2.274
1985-abril 90	36.3	43.0	20.7	0	100	2.081
1990-97	0	33.7	59.6	6.7	100	2.123

Fuente: Baumeister 1999:20

Cuadro 2: Redistribución de la tierra en Nicaragua (1979-1997)

Tipo de beneficiario que recibe tierra	**Número (miles)**	**Área distribuida (miles de manzanas*)**
1.Miembros de cooperativas (período sandinista)	48.5	895
2.Individuos (período sandinista)	12.0	431
3.Subtotal (período sandinista)	**60.5**	**1.326**
4.Resistencia Nacional	18.5	465
5.Militares sandinistas desmovilizados y personal de seguridad	3.6	80
6.”Recontras”	3.3	35
7.”Recompas”	0.7	13
8. Área de propiedad de los trabajadores	18.0	142
9.Subtotal (período del Gobierno de Chamorro)	**44.1**	**735**
10.Colonos tradicionales	4,4	135
11.Otros	3.1	106
Total	**112**	**2.302**
% del total de familias rurales y tierra agrícola	35	28

*1 manzana=0.7 hectáreas
**El Censo de Población de 1995 indica que el número total de familias rurales u hogares es 324.000. El área total de tierra agropecuaria 1997 se estimó en 8.225.000 manzanas. Fuente: Baumeister 1999:20

Formaban parte de la lógica o práctica neoliberal la descolectivización masiva y la disminución significativa del crédito y de los servicios de apoyo. Una diferencia importante en las políticas de reforma agraria durante los 90 fue la escala de la redistribución de la tierra a productores individuales no vinculados a cooperativas. Tales productores recibieron cerca del 60% de las 2,1 millones de hectáreas de tierra entre 1990 y 1997 (ver Cuadro 1).

Miles de productores organizados en las CAS comenzaron también a trabajar la tierra de forma individual. Un estudio sobre el desarrollo cooperativo en los departamentos del norte Pacífico, León y Chinandega, en diferentes períodos, muestra los niveles de parcelación y la dinámica que ello significó (Jonakin 1996). Para 1993, solo 21 (40%) de las 53 cooperativas entrevistadas aún existían. El parcelamiento de la tierra se debió a varias razones. Entre ellas, tensiones internas de las cooperativas de larga data sobre temas como pagos, supervisión y años de intervención estatal en la toma de decisiones y en fijación de precios, como la disminución del crédito, las deudas, y el temor a perder los derechos de tenencia colectiva (ibid 1180-1182). Muchos miembros de cooperativas que empezaron a trabajar individualmente lo hicieron sin tener sus títulos de dominio. La vulnerabilidad llevó a muchos de estos productores a vender a precios bajos, menores a los del mercado. Aunque pocas de las CAS que quedaban en dichos departamentos habían vendido la tierra en el período estudiado, un 34% de las CAS parceladas contaban con algunos miembros que habían vendido (ibid 1186). En otros departamentos como Rivas, al sur, un 30% había vendido tierras entre 1990 y 1994 (ibid 1186).

El resultado de estas tendencias fue que bajó significativamente el número de las cooperativas registradas, de acuerdo a cálculos de 2.679 a fines de los 80 a 915 en menos de una década (Baumeister 1999, citando a Blanco, 1998). Hacia el final de 1999 el sector cooperativo rural contaba con alrededor del 9% de la tierra y un 8% de la población rural (Ruben y Masset 2003, citado en Ruben y Lerman, 2005:33).

El cambio radical hacia el mercado afectó a la producción agrícola y a las relaciones sociales agrarias. Como porcentaje del PIB, el crédito agrícola disminuyó de 43% a comienzos de los 90 a 14% hacia fines del 2001 (Ruben y Lerman 2005, citando al Banco Mundial, 2003). En general, los pequeños y medianos productores, incluyendo los asociados a cooperativas, fueron impactados negativamente por las restricciones en el acceso al crédito. Su participación en el crédito de corto plazo bajó de 52% a 36% entre 1989 y 1991 (ENVIO 1992). Adquiriendo la mayor parte del crédito antes adjudicado a las empresas estatales, los grandes productores llegaron a una participación de 55% en 1991 (ibid).

El número de hectáreas para la producción agropecuaria asociado a los pequeños y medianos productores cayó en un 50% entre 1990 y 1991 (ENVIO 1992:13). El área sembrada con granos básicos (principalmente maíz y frijol) que había declinado en aproximadamente un 25% entre 1988 y 1990, creció un 15% en 1991 a medida en que la paz llegaba a las zonas previamente en conflicto y mientras se redistribuía tierra a las fuerzas desmovilizadas (ENVIO 1992:13). Más aún, los miembros de las cooperativas que trabajaban tierra parcelada algunas veces cambiaron los patrones de producción hacia cultivos de subsistencia dentro de sus estrategias de sobrevivencia (Jonakin 1996).

El crecimiento en el área sembrada no se reflejó en un aumento de la producción puesto que ésta continuó disminuyendo. Ello se debió a las reglas más estrictas en la adjudicación del crédito que impactaron a los pequeños y medianos productores. El Banco Nacional de Desarrollo (BND) y otros bancos privados recién creados insistían en el pago de las deudas antiguas y la presentación de los títulos de propiedad. Para superar las deudas, muchas cooperativas se vieron obligadas a vender sus activos colectivos, incluyendo maquinaria y alguna tierra, antes de asignar tierra a miembros individuales (Nitlalpan 1994, Westphal, 2002). Los destinatarios se negaron a pagar las deudas por varias razones porque: carecían de ingresos, consideraban que eran deudas de las cooperativas y no de su responsabilidad o les preocupaba que el repago no fuera considerado por el banco hasta que no hubiesen cancelado la deuda completa. Por tanto, conseguir nuevos préstamos fue extremadamente difícil (ibid). El BND pronto cerró 16 agencias en el interior del país donde se concentraba gran parte de la producción campesina. A medida que el BND se racionalizaba, la entrega de créditos fue crecientemente asumida por otros agentes financieros. Un grupo de sandinistas formó en 1993 la que más tarde llego a ser la cooperativa más grande del país, CARUNA, Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional. Gracias a un paquete de asistencia para el desarrollo de la Unión Europea, CARUNA se expandió a 250 cooperativas, 28.550 miembros y 35 ramas hacia mediados del 2011 (END 2011). Otros agentes de crédito fueron: los bancos privados, que tendían a favorecer a los grandes productores, pequeñas y dispersas intervenciones de donantes internacionales, un creciente número de ONGs e instituciones de microcrédito. Como ocurre en otros países (Bateman y Chang 2012) el microcrédito a menudo se complica cuando la lógica comercial viene a minar la lógica de justicia social y se imponen altas tasas de interés. Después del cambio de gobierno, volvieron a aparecer las prácticas de crédito informal

de prestamistas, el crédito a cuenta de la cosecha y distintas formas de aparcería. (ENVIO 1992:14). En 1998 el BND se cerró completamente.

El corte de muchos servicios de apoyo también afectó negativamente a los pequeños productores. Entre ellos la eliminación de los precios de garantía de los granos básicos que antes proporcionaba la Empresa (estatal) Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS). En 1992, la Revista ENVIO informaba acerca de la caída de los precios de 30% y 66% del maíz y el frijol, respectivamente (ENVIO 1992). Ello también se debió a la apertura hacia la importación de alimentos más baratos. Así resume ENVIO las consecuencias de los cambios en las políticas:

> "En síntesis, la política restrictiva de crédito y la liberación total de los mercados agrícolas, han significado un menor acceso a financiamiento para el campesinado y precios deprimidos para sus productos. Esta combinación de poco crédito y bajos precios ha profundizado los niveles de descapitalización y endeudamiento del campesinado, reduciendo gravemente su capacidad de producción y su nivel de ingresos." (ENVIO 1992)

Además, las devaluaciones periódicas aumentaron la demanda de ciertos productos de agro exportación de los grandes agricultores, quienes se beneficiaron de la reestructuración de la deuda y contaron con un mercado relativamente protegido para el arroz y el sorgo.

El resultado de todo esto fue aumentar la inequidad en las áreas rurales y resurgieron procesos de concentración de la propiedad de la tierra. Declinó el empleo rural, el crédito y los precios de finca, factores que empobrecieron a los trabajadores rurales y a los pequeños productores. Las cooperativas y los pequeños productores se vieron obligados a adoptar estrategias de sobrevivencia que llevaron consigo venta barata de tierras y de fuerza de trabajo, prácticas como la aparcería y la utilización del crédito de usureros (ENVIO 1992). Resurgieron en las áreas rurales otras relaciones sociales pre-revolucionarias, como el colonato, mediante el cual campesinos sin tierra llegaron a ser "colonos" de pequeños lotes y casas rudimentarias entregadas por los grandes productores para los cuales trabajaban.

En respuesta a la intensificación del conflicto agrario y al descontento de los trabajadores, en 1990 el gobierno se vio forzado a negociar un acuerdo en relación a las empresas estatales. Los primeros acuerdos bajo la "concertación económica social" en octubre de 1990, consideraron que el proceso de privatización tomaría en cuenta los derechos de los trabajadores a tener una participación en la propiedad y que las tierras no serían devueltas a somocistas cuyas propiedades hubieran sido confiscadas por la revolución (CIPRES 1992:35). En segundo lugar, en agosto de 1991, se acordó que cualquier privatización o devolución de tierra a sus previos dueños reconocería que un 25% pertenecía a los trabajadores (CIPRES 1992:37). En el sector agropecuario, 38 empresas estatales eran manejadas por sus trabajadores en la llamada Área de Propiedad de los Trabajadores (APT). Incluían 147 fincas de 170.000 manzanas con 18.000 trabajadores, con 17 empresas industriales de servicios. En la práctica, sin embargo, la privatización y la devolución de tierras se desarrollaron rápidamente, mientras muchas empresas manejadas por los trabajadores luchaban por sobrevivir en un contexto de

racionalización aguda del crédito y de pérdida de personal administrativo. En dos o tres años muchos habían vendido sus activos a productores privados.[3]

La combinación de todos estos factores intensificó el despojo de las tierras y la reconcentración de la propiedad de la tierra. Algunas tierras se devolvieron a sus previos dueños. Los bancos tomaron tierras que habían sido puestas como garantías por lo deudores que no pudieron pagar sus deudas. Otros productores se sintieron presionados a vender dado el escenario riesgoso y el ingreso de actores más poderosos. Estos procesos no sólo afectaron a los miembros de las cooperativas sino también a los trabajadores de las anteriores empresas estatales que habían recibido tierras y otros activos como parte del arreglo post-conflicto.

La liberalización económica y la transición desde un desarrollo dirigido por el Estado a uno centrado en el mercado, trajo consigo varios cambios en la naturaleza del sector cooperativo. Primero, muchas cooperativas vendieron la tierra al encontrarse sin apoyo del Estado, sin subsidios, ni crédito, inseguridad en relación a los títulos y por el aumento de los precios de los insumos. El resurgimiento de los mercados de tierras, particularmente en las zonas agrícolas cercanas a los centros urbanos, estimuló la venta de tierras por parte de las cooperativas. Un líder de la sociedad civil resumió el sentimiento de muchos productores en relación a la tierra de esta manera: "ellos se la van a tomar; es mejor vender; no hay ni crédito ni apoyo".[4] Muchos otros productores, previamente organizados en colectivos (Ej. CAS) dividieron la tierra entre ellos para trabajarla en forma individual.

A mediados del año 2000 se estimaba que había 881 cooperativas agropecuarias (CIPRES 2006:154). Debido a la fragilidad de los derechos de propiedad – falta de títulos convencionales y legalidad -solo el 27% de las cooperativas cumplía con los estándares administrativos y legales requeridos. Por ejemplo, dos de las más grandes asociaciones que representaban a cooperativas, UNAG y FENACOOP, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales, informaron que el 45% y el 66% de sus cooperativas afiliadas, respectivamente, no estaban legalmente constituidas. La cifra para las cooperativas de base como un todo era aproximadamente un 75% (ibid 155). Muchos pequeños productores habían integrado alguna de estas cooperativas como forma de acceder al crédito y otros recursos. En este proceso, se puso poca atención a la cuestión de construcción de capacidades organizativas y de gestión (ibid 155). Este problema se debió a la falta de programas de desarrollo cooperativo por parte del Estado u ONGs preocupados por el tema (ibid 155).

Sin embargo, surge la pregunta de cómo los pequeños productores pudieron permanecer en cooperativas durante un período de profundos cambios estructurales e ideológicos, en un contexto de políticas desestabilizadoras que incluían amenazas directas a sus propiedades y a sus medios de vida. Ruben y Lerman han analizado (2005) la situación en un estudio de 476 hogares en el año 2000. Estos incluyeron tres categorías: los que siempre habían sido productores independientes, los que habían abandonado las cooperativas para transformarse en productores individuales y los que habían permanecido en estas. Llegaron a varias conclusiones importantes. Primero, las razones

[3] Ponencia de Orlando Núñez en el taller "La Lucha por la Paz y la Construcción de una Economía Alternativa", organizado por Ekta Parishad, CIPRES, CES e International Initiatives, Managua, 16-18 de diciembre de 2013.

[4] Ponencia de Orlando Núñez en el taller "La Lucha por la Paz y la Construcción de una Economía Alternativa", organizado por Ekta Parishad, CIPRES, CES e International Initiatives, Managua, 16-18 de diciembre de 2013.

para abandonar o permanecer en una cooperativa van más allá de factores materiales o humanos, que a menudo se consideran en mucha de la literatura como los motores clave. Además, se encontró que entre los tres grupos no había diferencias significativas en relación a la cuestión de la productividad. Esto lleva a cuestionar aquellas teorías que sugieren que los productores independientes son más productivos que los organizados en cooperativas. En las 167 entrevistas realizadas a productores, sólo el 5% mencionó el ingreso como una razón para permanecer organizado. Un incentivo material importante fue "el acceso a los servicios para las cooperativas" (21%). El capital social ("le gusta trabajar con otros") fue destacado por el 12%. Pero la principal razón para permanecer fue de índole institucional. En primer lugar, la inseguridad y los riesgos asociados a i) la propiedad de la tierra confiscada y distribuida durante el régimen sandinista (43%) y ii) las altas deudas pendientes (19%) que habían acumulado durante el período de oro sandinista (Ruben y Lerman 2005: 40-41).

Segundo, se encontró que el capital social o la participación en redes sociales tenía un efecto positivo en el comportamiento de los hogares y el acceso al financiamiento. El estudio sugiere que los miembros de una cooperativa al estar organizados reducen los costos del crédito y facilitan las relaciones con ONGs y proyectos internacionales de desarrollo, elementos que pueden explicar "la lenta transición hacia la agricultura independiente" (p.43). En efecto, en el contexto de una reforma agraria que no entregó títulos de propiedad y donde los productores no pudieron usar su capital físico como colateral, el capital social "tiende a ser el colateral preferido…." (p.43).

Tercero, en relación a las percepciones de los productores acerca de su estándar de vida. Había claras diferencias a favor de los productores antiguos independientes en comparación a los previos o actuales miembros de cooperativas, pero no había diferencias significativas entre estos dos últimos sub- grupos, aunque los más recientes productores independientes eran los que mostraban los estándares de vida más bajos. Según los autores: "Una explicación posible de este inesperado patrón puede encontrarse en el bajo capital con que cuentan estos productores o grupo de productores. Los miembros de cooperativas que las abandonan no consiguen llevarse con ellos más que poca tierra y pocos animales" (Ruben y Lerman 2005:37).

Acción colectiva y el "doble movimiento"

Si se recurre a las teorías para identificar los factores que jugaron un papel en detener la marea de la descolectivización, se debe considerar la economía política, es decir las relaciones de poder que juegan un papel en la asignación de recursos. La neoliberalización no solo tuvo dramáticos efectos de exclusión que debilitaron y desempoderaron a los sectores populares, sino también provocó diversas formas de resistencia y solidaridad. Esto es coherente con la noción del "doble movimiento" (Polanyi 1944), donde los procesos que refuerzan los principios del mercado, promueven reacciones espontáneas de la sociedad que pretenden fortalecer la protección social vía otros principios de asignación de recursos e intercambio. En este sentido, diversas formas de acción colectiva y solidaridad son importantes para reafirmar principios de reciprocidad (dar, recibir, compartir) y redistribuir por la vía estatal. Así mismo, los movimientos sociales pueden ejercer presiones sobre actores e instituciones más poderosas.

El "doble movimiento" de los 90 en la Nicaragua rural comprendió i) la rápida liberalización del mercado, las privatizaciones, la estabilización económica y la

disminución de las funciones y capacidades del Estado (como los compromisos relativos a la redistribución de tierras y al desarrollo agrario emprendido por el gobierno en el contexto del proceso de paz) y ii) acciones colectivas de parte de los trabajadores rurales, combatientes desmovilizados, cooperativas y pequeños productores que se involucraron en diversas formas de resistencia, solidaridad e innovación social y productiva en defensa de sus medios de vida y fincas. Estos movimientos no solo involucraron acciones colectivas a nivel micro, sino también a mayor escala.

Este movimiento llevaba consigo una respuesta de resistencia de los grupos populares y otra internacional en la forma de solidaridad norte-sur. Ello se expresó a través de ayuda canalizada a través de ONGs del norte y de comercio a través de redes agroalimentarias alternativas (Goodman et al, 2012). Desde la perspectiva del desarrollo cooperativo, estos diferentes enfoques detonaron importantes innovaciones institucionales.

Esta sección examina cuatro respuestas que afectaron o involucraron a cooperativas. Ellas incluyen: i) la proliferación del conflicto a comienzos de los 90, ii) la estructuración de un movimiento cooperativo más allá del nivel local, iii) el empoderamiento económico y político de los productores de café organizados en cooperativas y vinculados al movimiento mundial del comercio justo, y iv) la organización y empoderamiento económico de miles de mujeres de áreas rurales que tuvieron acceso a pequeños lotes de tierra, pero que, hasta ese momento aún no eran activas como productoras.

Resistencia civil y armada

A comienzos de los años 90s se desarrollaron conflictos, protestas e invasiones de tierras impulsadas por trabajadores de algunas empresas estatales y miembros de cooperativas. En gran parte ello fue la respuesta a tomas de tierras por parte de los “sin tierra” y grupos rebeldes; contras desmovilizados, desempleo masivo, empeoramiento de las condiciones de vida de trabajadores y campesinos sin tierra y la incapacidad del gobierno para cumplir los acuerdos de paz. Así resume el CIPRES la naturaleza de esta lucha:

> “La ofensiva de los ex-propietarios y funcionarios del gobierno solo ha sido contenida por la resistencia de los cooperativistas, los trabajadores y el surgimiento de los recompas [ver abajo] cuya composición social predominantemente es la de semiproletarios sin tierra y ex-cooperativistas todos ellos amenazados o desalojados de sus tierras por los grupos armados de contras o extremistas de la UNO.” (CIPRES 1992:37)

Entre abril y octubre de 1991, también estallaron 38 conflictos importantes entre trabajadores de la agroindustria, la industria y la construcción (ibid). En las zonas de agro exportación de la región de la costa del Pacífico, unas 4.000 familias de desempleados y tropas desmovilizadas se movilizaron para tomar tierras. En el interior del país, donde se concentra la mayor parte de la producción de granos básicos y café, unas 10.000 familias ligadas principalmente a ex combatientes de la Contra exigieron tierras. (ENVIO 1992:23)

Como se dijo anteriormente, estas acciones crearon diversos obstáculos en el desarrollo de la contra reforma agraria. En mayo de 1991, la Corte Suprema declaró inconstitucionales las cláusulas de un Decreto de 1990 que había facilitado la

devolución de propiedades a ex somocistas cuyos activos habían sido confiscados después de la revolución. Hacia fines de ese año una espuria alianza de legisladores centristas de la coalición de gobierno y diputados sandinistas ratificó un veto presidencial de una ley que desconsideró la Concertación de Acuerdos al no reconocer los derechos de los que habían recibido tierras a fines de los 80 como parte del proceso de paz o de los que habían sido beneficiarios de dos leyes, promulgadas durante el período de transición en 1990, que facilitó la venta (a menudo a sandinistas) de terrenos y casas urbanas estatales (CIPRES 1992:37-37).

Estos procesos afectaron a los miembros de las cooperativas y a los trabajadores de las empresas estatales que habían recibido tierras como parte del acuerdo post conflicto. Este acuerdo siguió a un intenso período de resistencia en 1991 que virtualmente paralizó la economía. Como explica el ex líder del Frente Unido Andrés Castro:

> "Hubo un momento, después de la concertación de acuerdos, que las organizaciones sandinistas de la sociedad civil estimularon a los trabajadores y campesinos a tomar las fincas estatales, porque estaba claro que [el gobierno] no entregaría las tierras que habían sido designadas como el Área de Propiedad de los Trabajadores. Esto fue un momento importante en la resistencia, ya que si no se hubiese puesto presión sobre el gobierno, éste no habría cumplido con los acuerdos." (Entrevista a Pedro Huerta, 2014)

Los esfuerzos del gobierno por desplazar a los trabajadores y productores de las tierras "ilegalmente" tomadas a menudo no fueron efectivos. Orlando Núñez explica que hubo un acuerdo implícito entre la policía y el ejército por una parte (ambas instituciones afines al sandinismo) y los desalojados por otra. Los desalojados dejarían la finca sin resistencia, lo que legalmente les exigieran la policía o el ejército, pero una vez que las fuerzas de la ley abandonaran el lugar, los desalojados retornaron. (Entrevista a Orlando Núñez, 2015).

El rearme de los ex-Contras desmovilizados fue una de las expresiones violentas de lo que hemos llamado "el doble movimiento". A estos grupos se les llamó "Recontras". Sus acciones entre las que se encontraban invasiones de tierras e incluso actividad delictiva llevaron a que personal desmovilizado del Ejército Sandinista se reamara formando los "Recompas". Las tensiones entre los dos grupos también se habían intensificado por el hecho de que el gobierno entregara tierras de las cooperativas a ex-combatientes como parte de los Acuerdos de Paz (ibid.).

Como explica José Luis Rocha, un gobierno elegido por su promesa de traer la paz, pronto se encontró a sí mismo creando el efecto contrario: creciente militarización (y criminalidad). Por otra parte, con grupos armados que contaban en su seno con combatientes de entre 16 y 800 miembros, la lucha armada estaba atomizada, lo que dificultaba las negociaciones con los insurgentes. Rocha destaca que la táctica de recurrir a las armas forzó al gobierno a satisfacer algunas demandas y tomar más seriamente los acuerdos firmados (Rocha 2001, 2010).

Los "Recompas" surgieron inicialmente de ex-miembros del Ejército Sandinista, como de socios de las cooperativas de auto defensa del norte y el interior del país, donde se había desarrollado gran parte de la guerra, debido a que sus tierras estaban siendo amenazadas por los "Recontras" y otras fuerzas de seguridad desmovilizadas (Cordero y Pereira 1992). Para sectores del campesinado que vivían en las zonas amenazadas identificadas con el sandinismo, la formación de los "Recompas" se vio necesaria por

seguridad y para resistir las acciones de los "Recontras" y otras fuerzas intentando tomar las tierras con diversos métodos (Cordero y Pereira 1992). No obstante, la gente estaba cansada de la guerra y el rearme constituía otro drenaje a los magros recursos de los productores agrarios.

Un acuerdo precipitado entre estos grupos que consideraron que tenían intereses comunes en relación a los programas de gobierno y la distribución de la tierra, fue ignorado cuando acciones de los "Recompas" forzaron a los "Recontras" también a exigir que estos se desarmaran (ibid 29). A fines de 1991, el gobierno había negociado acuerdos con ambos lados. Entre ellos se lanzó el programa "dinero por armas", lo que contribuía a la desmovilización y la legalización de las tierras entregadas a los desmovilizados y a la propiedad ya existente, incluyendo la de las cooperativas (ibid 30). Como puntualizan Cordero y Pereira, entregar dinero hizo muy poco, si es que hizo algo, para tratar con las causas del rearme. Lo que se necesitaba, sugieren, era una estrategia de desarrollo agrario inclusivo (ibid 31).

Algunos Recompas y Recontras que tenían intereses comunes en relación a la exclusión, al empleo y a la tierra formaron los "Revueltos". Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ONGs, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, apoyó las demandas de los "Revueltos" (Entrevista a Orlando Núñez, 2014). Las filas de los "Revueltos" pronto se ampliaron hacia los trabajadores rurales desempleados y los productores campesinos sin tierra.

Como símbolo de la reconciliación, nació la primera "cooperativa mixta" en 1992, formada por 50 ex-oficiales sandinistas y 50 Recontras, en las afueras de Managua. Como explica un líder de los Revueltos y presidente de la cooperativa:

> "La llamamos Esperanza, Paz y Reconciliación… Unimos nuestras necesidades y demandas por tierra y trabajo. Las instituciones gubernamentales tuvieron una opinión negativa de este proceso. Prefirieron vernos como raros a trabajar la tierra con nosotros [pero] la cooperativa aún existe" (Entrevista a Pedro Huerta, 2014).

En 1993, las amenazas de protestas se extendieron a los departamentos de la Costa Pacífico. Diez mil trabajadores azucareros de seis ingenios del país comenzaron una serie de paros y huelgas, reclamando que el gobierno no había cumplido los acuerdos firmados en 1992 en relación a los beneficios que los trabajadores recibirían con las privatizaciones.

En 1995, ex-miembros del Ejército Sandinista y algunos ex-Contras tomaron las armas una vez más y formaron el Frente Unido Andrés Castro, FUAC, en el norte del país. El FUAC estaba compuesto por 400 combatientes que se rearmaron para defender a activistas locales y las tierras indígenas. Estaban desilusionados de sus previos líderes, preocupados por los ataques a las cooperativas y a los líderes sociales locales y por la contra- reforma agraria que quería liquidar todo vestigio de la reforma agraria sandinista. Los líderes políticos de ambos lados se opusieron a sus acciones. Aunque el rearme socavó el frágil proceso de paz, facilitaba la reconciliación desde las bases (entrevista a Pedro Huerta, 2014).

El FUAC también fue activo en la región Atlántico Norte (también conocido como el Caribe) región donde la contra reforma estaba infringiendo los derechos a la tierra de los pueblos indígenas. Estos formaban 250 comunidades con aproximadamente 15.000 productores agrícolas en las regiones del norte y sur del Atlántico (CIPRES 2006). El

gobierno había establecido un banco de tierras para que las tierras comunales pudiesen ser compradas. El ex-dirigente del FUAC explica:

> "La lucha por la tierra en el Caribe ha sido constante y gracias a ella se ha impedido la expropiación por parte del neoliberalismo. El FUAC fue parte de esta lucha en el norte del Caribe junto a las comunidades y gracias a esto pudieron mantener sus tierras y obtener títulos bajo la ley 445 que protege la propiedad comunal" (Entrevista a Pedro Huerta).

La crisis rural también se manifestó en la capital, Managua. Varias organizaciones de la sociedad civil llamaron a una "movilización nacional" para protestar contra las políticas del gobierno que se veían desestabilizadoras de la vida social y económica del campo y la ciudad. En junio de 1995 nació un movimiento cívico de resistencia pacífica compuesto por campesinos, miembros de las cooperativas, trabajadores y estudiantes y la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA) junto con la ATC, también se plegaron. El centro de operaciones fue el ONG llamado CIPRES que mantenía lazos estrechos con el movimiento cooperativo y otros movimientos sociales (Entrevista a Orlando Núñez, 2014).

Unas 3.000 familias rurales, con trabajadores y productores vinculados a la APT y cooperativas, acamparon en los entornos del CIPRES y la Universidad Católica (UCA), ambos en el centro de la ciudad, por más dos meses. Iniciaron acciones de protesta no violentas y periódicamente bloquearon el tráfico (CIPRES 1995:23). Esta acción, conocida como el "plantón campesino", forzó al gobierno a negociar y cumplir varios acuerdos como la legalización de los títulos de dominio, beneficios para los trabajadores, mayor acceso al crédito y otras demandas de las cooperativas en conflicto (CIPRES 1995:24-25).

También, la UNAG, la organización más grande de productores agropecuarios, organizó marchas de protesta en la capital. El 16 de junio de 1995, para el Aniversario 14 de la Reforma Agraria, unos 6.000 productores de todo el país marcharon a través de las calles de Managua exigiendo créditos y los títulos de sus tierras. Según la UNAG, aún no se había legalizado 300.000 manzanas de tierra (bajo control cooperativo e individual) de 20.000 familias. Unos 30 productores agrícolas también ocuparon por tres semanas la Asamblea Nacional exigiendo solución a sus problemas de tierras. (ENVIO 1995).

El conflicto de Las Tunas

Las inseguridades respecto a la tierra y las condiciones de vida se agudizaron con la crisis del café de los años 90s. El colapso de los precios del café produjo un proceso de marginación social, quiebras, y tomas de tierras que desataron el levantamiento conocido como el de "Las Tunas". Este unió a unos 12.000 trabajadores sin tierra, agricultores, ex combatientes, algunos de los cuales habían sido previamente miembros de cooperativas (Pereira 2013). El conflicto se originó en dos departamentos del norte central del país, Jinotega y Matagalpa. El movimiento fue gatillado por la empresa CONSAGRA-AGRESAMI, que al final colapsó. Esta empresa contaba con modernos tractores, tierras del APT, generosas inversiones de bancos e inversionistas a través de procesos fraudulentos, coludiéndose con administradores del APT (Wilson 2012:11). Entre 1994 y 2000, la compañía tomó control de fincas estatales que sumaban entre 15.000 y 18.000 hectáreas y una de las empresas procesadoras de café (beneficios) más grandes de Centroamérica. Establecieron contratos con unos 10.000 productores de café

(Wilson 2013). Dada la incapacidad de la compañía para recuperar préstamos y pagar a los trabajadores, tuvo que cerrar, lanzando a miles de trabajadores y productores a una crisis más profunda aún.

En mayo de 2001, los desempleados comenzaron a vivir a lo largo de las carreteras de Matagalpa y Jinotega y en espacios públicos en la ciudad de Matagalpa. Para agosto, más de 6.000 campesinos habían establecido campamentos en la carretera al norte. En septiembre de 2002 se reubicaron en un lugar estratégico en la carretera Panamericana a Las Tunas donde su presencia y acciones atrajeron atención nacional. Primero, el gobierno intentó reprimir la protesta, pero el movimiento recibió amplio respaldo no sólo de los sandinistas, sino también de sectores de los medios de comunicación y la Iglesia (Pereira 2006), del Movimiento Comunal Nicaragüense y de cooperativas cafetaleras como la CECOCAFEN.

La ATC y la UNAPA, que había sido organizada por la ATC para representar a los trabajadores de las cooperativas, lideraron este movimiento y ayudaron a los rebeldes a elaborar un conjunto de demandas relacionadas con la reforma agraria. Estas incluían entregar títulos de propiedad a los trabajadores que estaban ocupando las tierras abandonadas por CONSAGRA-AGRESAMI, nuevos contratos de arriendo y condonación de deudas para los trabajadores que administraban las empresas del APT, así como la creación de un banco de tierras. (Wilson 2013:15).

Este acuerdo con el gobierno permitiría que 18 empresas estatales cafetaleras (12 previamente controladas por CONSAGRA-AGRESAMI) se entregaran con títulos de propiedad a más de 2.500 trabajadores agrícolas. Aunque muchos productores querían formar cooperativas, el gobierno favoreció la redistribución individual con lotes de alrededor de 2 hectáreas. Otras medidas incluyeron trabajo temporal para 6.000 trabajadores y ayuda en comida y salud de corto plazo (Entrevista a Orlando Núñez, 2014). No se les entregó crédito ni servicios de apoyo (Ricardo Pereira, 2013). Para sobrevivir, muchos trabajadores formaron cooperativas. UNAPA los integró a la asociación y los ayudó a organizarlas (ibid).

Fauné destaca que las capacidades del Ministerio de Agricultura son extremadamente débiles y que, además, sus análisis del desarrollo agrario basados, por ejemplo, en estudios macroeconómicos y de inversión, les impide tener un entendimiento real de los trabajadores rurales y sus familias: “en esos informes no aparece la problemática real de la gente.” Ella sugiere que un análisis en profundidad, les mostraría el aumento del descontento en áreas rurales debido a los nuevos procesos de desposesión y concentración de la tierra y a una creciente sensación de injusticia asociada a “olvidado” y a no haber sido compensados por el sacrificio que había significado su participación político-militar en el pasado (Fauné 2014). De esta manera, según su análisis, las condiciones que produjeron muchos de los períodos de resistencia armada desde comienzos de los 80 están aún vivas.

Estructurando un movimiento cooperativo

Si la era sandinista post- revolucionaria se caracterizó por la proliferación de cooperativas de primer nivel, generosamente apoyadas por el Estado, la era neoliberal vivió la estructuración de un movimiento cooperativo más autónomo y que fue más allá del nivel local. La formación de dicho movimiento fue la estrategia política y económica de las cooperativas para sobrevivir y empoderarse. En este sentido fue muy importante el esfuerzo de las cooperativas para organizarse horizontal y verticalmente a

nivel local. También surgieron organizaciones de un nivel más alto que se embarcaron en provisión de servicios, recolección de fondos de donantes extranjeros y ONGs que promovían el desarrollo organizacional e incidencia (CIPRES 2006: 155).

Para enfrentar las invasiones de terrenos y la pérdida del apoyo estatal, las cooperativas comenzaron a formar estructuras de segundo y tercer grado a comienzos de los años 90s. Las cooperativas agropecuarias y agroindustriales formaron su primera federación, la FENACOOP, en 1990. La FENACOOP jugó un rol en el cabildeo, además del reforzamiento de las capacidades administrativas, productivas y organizacionales de sus asociados. Luego se formaron otras federaciones, cooperativas y asociaciones socioeconómicas. Se crearon la UNAPA en 1993 y varias asociaciones sectoriales con los trabajadores de las empresas de la APT (CIPRES 1993). En los años siguientes se formaron federaciones de cooperativas, tales como la FEMUPROCAN, Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua en 1997, la FEDUBONIC, Federación de Dueños de Bosques de Nicaragua en el 2000, la FENIAGRO, Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua en 2006, la FECODESA, Federación de Cooperativas para el Desarrollo en 2007, la FEDECARUNA, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua en 2009 y FECAMPO, Federación Nacional de Cooperativas del Campo en 2010. La FENACOOP y luego otras federaciones promovieron Uniones de Cooperativas Agropecuarias, UCAs, organizaciones de segundo grado que comprendían grupos de cooperativas de primer grado a nivel local. Las UCAs cumplieron múltiples tareas, incluyendo defender la tierra de invasiones, cabildear con gobiernos locales y buscar nuevos productos, mercados y fuentes de crédito (Damiani 1994). Los líderes de las UCA fueron a menudo ex-líderes locales de la UNAG los que tenían capacidades organizacionales de administración y creación de redes. (ibid)

Varias asociaciones de cooperativas y ONGs también establecieron redes para construir una coalición amplia de fuerzas sociales. En agosto de 2002 se formó la Mesa Agropecuaria y Forestal, MAF. Se coordinó con el ONG CIPRES e incluyó varias federaciones de cooperativas, la ATC y la UNAG, organizaciones que representaban el APT y organizaciones de oficiales retirados o de ex-combatientes de ambos lados en las áreas rurales como ARNIG (Contras) y CNOR (sandinistas). La red tenía como objetivo construir una agenda para la acción, creando espacios para cultivar la colaboración y el apoyo mutuo (Chamorro 2007).

El apoyo parlamentario de los sandinistas y sectores de la coalición de gobierno que defendían los derechos de las cooperativas llevó a crear una legislación favorable para todo el movimiento. Hacia el final del período neoliberal, en 2005, la Asamblea Nacional promulgó la Ley Marco de Cooperativas. La ley llamó a la creación de dos nuevas instituciones, formadas luego en 2007: el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP, la organización gremial más importante del sector cooperativo. La ley también llamó a la formalización del sector, exigiendo el registro de las cooperativas y la actualización de sus estatus legal vía INFOCOOP. Antes de la formación de INFOCOOP, no había ninguna institución independiente asociada al gobierno que se especializara en el apoyo cooperativo. Este papel había sido deficientemente cumplido por un departamento dentro del Ministerio del Trabajo, MITRAB (Chamorro 2007). INFOCOOP se constituyó como una entidad autónoma, donde la mayor parte de su Directorio (5 miembros) fue constituido por dirigentes de las principales federaciones de cooperativas. Otros cuatro miembros representaban a los ministerios. El sector cooperativo consideró todo esto como una victoria significativa que presagiaba un buen

futuro para el movimiento cuando los poderes, ejecutivo y legislativo, fueron nuevamente tomados por el partido sandinista después de la victoria electoral a finales de 2006.

Finalmente el movimiento cooperativo se esparció a la región de la costa Caribe Norte, la que había sido influida por formas de organización colectivas, asociadas con los sandinistas. Ahora existen, cooperativas mineras, pesqueras y agropecuarias junto a las primeras agro forestales creadas en 2007. Como observa Pedro Huerta:

> "Ha sido un largo proceso lograr que la comunidad reconozca el valor de la organización cooperativa, pero ya se han dado cuenta que tales formas abren espacios para acceder a las instituciones de gobierno y a la asistencia internacional para el desarrollo. Sin esta experiencia de lucha, el gobierno nunca habría designado más de 30.000 Km^2 en las Regiones Autónomas del Caribe como tierra comunal indígena" (Entrevista a Pedro Huerta).

El surgimiento del Comercio Justo

Hacia fines de los 90 los productores de café sufrieron la caída de los precios, que bajaron en alrededor de un 60% entre 1998 y 2001 (Bacon 2005). Los ONGs y las agencias donantes trataron de aliviar deudas, desarrollar proyectos de infraestructura y proporcionar ayuda en alimentos y salud a través de lo cual surgieron enfoques alternativos. Ello involucró a las cooperativas de productores de café, que constituían el 20% de los 31.000 productores cafetaleros del país (Bacon et al 2008:262) y que lograron reposicionarse, en alguna medida, en la cadena de valor, integrando redes de comercio justo con certificación y organizándose en cooperativas de segundo grado y organizaciones para movilizar recursos y lograr influir en las políticas hacia su sector. El movimiento del comercio justo y su mercado se expandió rápidamente, en parte inspirado por la solidaridad internacional con la revolución nicaragüense. Promovía una forma alternativa de globalización económica que buscaba empoderar a los pequeños productores organizados en cooperativas, otorgándoles precios mayores a sus productos, apoyando proyectos sociales, y promoviendo la agroecología y la producción orgánica (Bacon et al 2008:135).

Para reposicionarse en la cadena de valor y acceder a los precios que eran mayor a los del mercado, se introdujeron sistemas de control de calidad (Bacon 2013) e incluso se construyeron laboratorios para degustar el café en las cooperativas. Hasta ese momento esos mecanismos habían sido controlados por las tostadurías de café en los países importadores y en unos pocos laboratorios nacionales que pertenecían a las empresas exportadoras. Esta innovación derivó de una alianza entre dirigentes de las cooperativas de pequeños productores de café y la empresa tostadora localizada en California, Thanksgiving Coffee. Todo esto ocurrió no sólo por la crisis cafetalera, sino también por la especialidad en un segmento del mercado norteamericano de "consumidores conscientes" interesado en alta calidad, la producción sostenible y el comercio justo. Para 2008, unas 2.600 pequeñas tostadurías de café, comerciantes y algunas compañías grandes como Starbucks, así como organizaciones y representantes de los productores del país se unieron a la Specialty Coffee Association of America, SCAA, que promovía activamente el mejoramiento de la calidad y el comercio justo.

El trasfondo político y cultural de esta alianza se basó en relaciones personales y lazos de solidaridad establecidos durante el período revolucionario de los 80. Un lugar donde se concentró en los EEUU la industria especializada del café fue el área de la Bahía de

San Francisco. También fue un centro importante del Movimiento por la Paz y Solidaridad con Centroamérica. Muchas delegaciones de éste viajaron a Nicaragua a cortar café, o a trabajar en proyectos sociales en las zonas de guerra durante los 80. Durante la Administración Reagan que apoyaba a los Contra se había impuesto el embargo a las importaciones de productos nicaragüenses. Para sobre pasar el embargo Thanksgiving Coffee, Oxfam Canada, y Bridgehead Trading lanzaron el proyecto Café por la Paz para importar café nicaragüense desde Canadá y después revenderlo en los Estados Unidos a consumidores individuales o al Movimiento por la Paz y Solidaridad en Centroamérica. Equal Exchange, una cooperativa localizada en Boston, de tostado, lanzó una iniciativa similar (Equal Exchange, sin fecha). De esta manera se obtuvieron ingresos que se enviaron a la UNAG, una de las organizaciones que organizó cooperativas en Nicaragua en los 80 y 90.

En Europa y EEUU el mercado de comercio justo se fue desarrollando. Este movimiento se formalizó en 1988 cuando en Holanda se creó la marca Max Havelaar con la estrategia de crecer el mercado, previamente creado por las Organizaciones de Comercio Alternativo, que sólo podían mover pequeños volúmenes de ventas. Diez años más tarde, se estableció la iniciativa norteamericana por el etiquetado, Transfair USA (ahora conocida como Fair Trade USA). Nuevamente, los productores cafetaleros nicaragüenses se posicionaban bien y aprovechaban el rápido crecimiento de este mercado. El director de Fair Trade USA vivía y trabajaba en Nicaragua desde los 80, colaborando con la reforma agraria y las cooperativas. También apoyo la formación de una de las cooperativas de café de segundo grado más grandes, la PRODECOOP, cuyo objetivo era mejorar la posición de los productores en la cadena de valor a través del manejo directo del procesamiento y las exportaciones.

PRODECOOP actualmente está conformada por 38 cooperativas de primer nivel que reúnen alrededor de 2.300 familias afiliadas (unas 10.000 personas). Si los productores estaban a cargo de las exportaciones, tenían que estar también a cargo de la selección y secado del grano, lo que hasta ese momento había sido el negocio de empresas agroindustriales y de los grandes productores. Varias cooperativas aprovecharon el mercado de comercio justo certificado para unirse y formar cooperativas de segundo grado que compraran sus propias instalaciones agro-industriales para preparar el café para la exportación. Hacia 2009, controlaban aproximadamente el 30% de las exportaciones de café de Nicaragua. Miembros de las cooperativas conectados con el comercio justo también pudieron conseguir créditos. Según datos de 2006, el 77% de los miembros tuvo acceso a crédito pre-cosecha; sólo el 33% de los productores no cooperativizados tuvo acceso a éste (Bacon et al 2008:267).

Otro logro importante fue formar una asociación de tercer nivel, cuyo rol era proporcionar servicios, lo que era clave para el empoderamiento económico, pero también representar y hacer incidencia. A medida que aumentaba el número de cooperativas de primer y segundo grado embarcadas en la revolución de la calidad y vinculadas al comercio justo, se creaban las bases para la unión de ocho cooperativas de segundo grado que constituyeron CAFENICA. Hoy CAFENICA comprende 10 organizaciones que representan 10.337 pequeños productores cafetaleros, 24% del número total. CAFENICA los representa y defiende, provee servicios de fortalecimiento organizacional y capacidades administrativas, productividad y calidad, mejorando el acceso a mercados y la igualdad de género. La intensificación del desarrollo cooperativo ha sido útil no sólo para proteger a los productores de los efectos de la crisis y la liberación del mercado, sino también les ha facilitado el acceso a los donantes a través

de las ONGs con proyectos contra la pobreza; los que proliferaron en los 90 y a comienzos de los 2000. Como Bacon et al, exponen:

> "Nicaragua emerge como un lugar clave para desarrollar enfoques alternativos que, potencialmente, puedan reducir el hambre que surge durante determinados periodos del año debido en gran parte a la capacidad de las cooperativas de pequeños productores vinculadas al comercio justo y a la seguridad alimentaria que se desarrolla en las áreas rurales" (Bacon et al. 2014:136).

Las cooperativas también fueron importantes en la constitución de la principal organización regional del comercio justo, conocida como la CLAC - Red para el Caribe y Latinoamérica de Pequeños Productores del Comercio Justo. La CLAC es la asociación más grande de pequeños productores agrícolas vinculados al comercio justo con 200,000 miembros en 20 países. La Directora General de PRODECOOP jugó un rol dirigente en la CLAC, que a su vez influyó en la organización internacional, Comercio Justo Internacional (FLO). La CLAC obtuvo voz y voto dentro de FLO a través de lo cual logró influir en la fijación de precios justos a los productores y logró que el café del comercio justo no se comprara de las grandes empresas (Bacon 2010).[5]

Según Bacon (2008), debido a todos estos esfuerzos, las cooperativas del comercio justo se han visto favorecidas en educación, adquisición de tierras, ahorros e inversiones en sus fincas, casas y comunidades. Pero el comercio justo no ha sido una panacea que les defina un camino hacia una vida más segura. Las cooperativas del comercio justo a menudo venden sólo una parte de su producción a través de dichos canales. Los precios reales del comercio justo aún continúan declinando, mientras los precios de mercado sufren fluctuaciones significativas. Bacon et al. exponen: "….persisten entre los pequeños productores muchas inseguridades, como bajos ingresos, alta emigración e inseguridad alimentaria" (2008:259). Y finalmente, pero no por menos importante, su reposicionamiento en las cadenas de valor está constreñida por las relaciones de comercio norte-sur que sitúa más valor al tostado y a la actividad comercial a nivel del consumidor final, la cual se desarrolla principalmente en los países del norte.

"Hambre Cero": El Bono Productivo Alimentario (BPA)

Otra característica importante del "doble movimiento" fue la iniciativa llevada a cabo por la sociedad civil en el año 2000 de organizar varias miles de mujeres productoras rurales en cooperativas y grupos pre-cooperativos como parte del programa que se llamó Hambre Cero. Este programa perseguía un doble objetivo, promover la seguridad alimentaria y empoderar a mujeres rurales y de la periferia urbana al poder capitalizar sus lotes y a través de la capacitación y organización.

Los orígenes de Hambre Cero vienen de una donación de un millón de dólares que el ONG, CIPRES, recibió de Oxfam Inglaterra y ONGs españoles e italianos. El objetivo de la donación fue mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales afectados por el Huracán Mitch, que azotó al país en 1998. El CIPRES diseñó un proyecto que perseguía empoderar económicamente a las productoras que tenían acceso a pequeños lotes de tierra. Se les proporcionaba un paquete de insumos y activos (al principio gallinas, una cerda y una vaca preñada), en parte como subvención y en parte con la condición de que el 20% del costo del paquete fuera pagado a un fondo de crédito

[5] Tal posición, sin embargo, no pudo evitar que Fair Trade USA se separara de FLO en 2011, precisamente por esta discusión (Reed 2012; Utting 2012).

revolvente, para incorporar a más mujeres al programa. Las beneficiarias se organizaron en grupos de aproximadamente 50 mujeres con la esperanza de poder más adelante formar cooperativas. Para 2014 se habían formado alrededor de 1,000 grupos pre-cooperativos y 300 cooperativas (Entrevista con Jorge Flores).

El programa puso especial atención a la capacitación, al aumento de la productividad y en concebir una serie de efectos multiplicadores a nivel de la agroindustria y el desarrollo económico local. A través de un mayor grado de organización también se pretendía incidir con los gobiernos municipales y promover el desarrollo local. Sin embargo, como es típico del campo de acción de las ONGs, la escala y cobertura del proyecto tuvo límites. No obstante, en seis años, el CIPRES no sólo había incorporado 3.000 mujeres sino también lo había afinado como programa modelo. Las beneficiarias formaron 130 cooperativas, algunas de las cuales tenían capacidad agro-industrial. Dados los estrechos vínculos existentes entre el director del CIPRES, Orlando Núñez, y el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, este se comprometió a desarrollarlo a escala nacional si ganara la elección presidencial. Cuando esto finalmente sucedió, a fines de 2006, Núñez fue nombrado Asesor del Presidente para Asuntos Sociales y el nuevo gobierno adoptó el modelo del CIPRES con algunas variantes como la base del programa alimentario prioritario del país.

El programa también tenía un objetivo estructural, no sólo en términos de reducción de la pobreza y empoderamiento de mujeres, sino también estimular la producción nacional alimentaria y agroindustrial. El censo agrario de 2000 (CIPRES 2006) había detectado un estrato de la población rural, unas 75.000 mujeres que, teniendo acceso a tierra producían muy poco. Hambre Cero y sus efectos multiplicadores pretendían transformar esta situación. Este enfoque socio productivo de la reducción de la pobreza, centrado en mejorar la capacidad productiva y el empoderamiento a través de la acción colectiva, contrastaba con los programas que sólo entregaban ayudas monetarias condicionadas como ocurrió en varios países en desarrollo. Tales programas se concentraban principalmente en mejorar el acceso a los servicios sociales de forma indivdual.

A medida que se ha ido desarrollando el programa ha debido enfrentar numerosos desafíos. Estos incluyen la capacidad limitada del Estado de proveer un apoyo técnico y organizativo efectivo y a gran escala, la búsqueda del equilibrio entre la urgencia de extender el programa para abarcar a más mujeres, y la calidad de los animales que se proveen y distribuyen, así como la cantidad de animales que mueren o son robados.[6] Asimismo, varios estudios han puesto en evidencia los problemas asociados con el sesgo político al momento de la selección de beneficiarias, la inclusión de beneficiarias que no clasifican como parte del grupo meta, la opacidad de la información que brinda el gobierno sobre el programa, la falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios del programa y el deficiente monitoreo y evaluación de impacto por parte del gobierno (más allá de datos sobre la cantidad de animales entregados por el programa).[7]

Sin embargo, la mayoría de estos estudios también hacen ver el impacto general positivo en lo referente a la producción de alimentos y su consumo, así como ciertos

[6] Véase Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), *Programa Hambre Cero*, 29 de mayo de 2014, disponible en: http://www.economiafamiliar.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=672&Itemid=228

[7] Kester 2009, Cáceres *et al.* 2011, IEEPP 2011, Grupo Cívico Ética y Transparencia 2014, Grupo Venancia 2015, MAGFOR et al. 2013, Larracoechea 2011

aspectos del empoderamiento de las mujeres. Un estudio encargado por las Naciones Unidas destacó una gama de impactos:

> "Durante los tres años que tiene el programa, ha aumentado la ingesta diaria de alimentos, la asistencia de los niños/as a la escuela está garantizada, los ingresos son más estables, las mujeres beneficiarias están más organizadas, ha aumentado la participación comunitaria y se han fortalecido las calidades de liderazgo". (Cáceres *et al*., citando a Kester 2009).

Otro estudio realizado por el Instituto para Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) nota lo siguiente:

> "El Programa … representa un avance en los programas pro-pobre desarrollados en el país al incorporar el aspecto productivo agropecuario, que prioriza en cobertura a mujeres y comunidades indígenas …. [D]ebe valorarse positivamente el hecho de que se promueva el desarrollo económico y el empoderamiento de las mujeres, así como la incorporación de una discriminación positiva hacia las comunidades étnicas …" (IEEPP 2011).

Un estudio del desempeño del programa realizado en 2010 en la parte central del país dice lo siguiente:

> "Entre los beneficios identificados entonces por las mujeres que habían recibido el bono destacaban una mejora en la alimentación, un aumento de autoestima, más seguridad económica y mayor poder de decisión en sus hogares. Todos estos factores los identificamos como elementos que contribuyen favorablemente al empoderamiento de las mujeres… [C]omo obstáculos … el BPA no aborda el problema de la falta de acceso a la tierra para las mujeres; que no altera, sino que se basa en la división sexual del trabajo y la refuerza…" (Grupo Venancia 2015).

Cuando se volvió a realizar el estudio cuatro años más tarde, se encontró un progreso continuado en lo referente a la producción de alimentos, la generación de empleo y un mayor poder de negociación en el hogar por parte de las mujeres, pero también había serios problemas debido al declive de la asistencia técnica, cooperativas a nivel primario que no eran funcionales y un persistente clientelismo. (Grupo Venancia 2015).

Aparte de los problemas técnicos y político-administrativos, existe la cuestión de qué tan transformativo ha sido el programa. Esto es pertinente por tres razones. En primer lugar, el mismo estudio citado anteriormente sugiere que el empoderamiento de las mujeres participantes es limitado por factores y relaciones culturales y sociales asociadas con el machismo y los roles e identidades de las mujeres como 'amas de casa' en vez de 'productoras': su falta de control sobre los presupuestos familiares; y su limitado papel de lideresas en las comunidades. El estudio hace un llamado a la necesidad de capacitar a las mujeres no solamente en los aspectos técnicos sino también en asuntos ligados a la temática de género. En segundo lugar, las dimensiones de acción colectiva asociadas con las organizaciones de mujeres (y su organización en múltiples niveles) siguen subdesarrolladas. Los vínculos existentes con organizaciones nacionales de mujeres rurales, y en particular la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua (FEMUPROCAN) y la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) son un buen augurio, siempre que tales vínculos puedan estimular a los esfuerzos de organización e incidencia. Otro reto, a más largo plazo, es si el programa puede sobrevivir si llega al poder otro partido que no sea el FSLN.

Conclusiones

El análisis del desarrollo de Nicaragua y la reconciliación post-conflicto nos muestra que la "paz" y la estabilización económica, en el contexto de la neoliberalización, tuvo el costo de una profunda crisis económica y social, que se manifestó en alto desempleo, despojos de tierras y focos de conflictos armados dispersos. La principal lección política que recibió el gobierno embarcado en el proceso de paz y la construcción "post-conflicto" podría resumirse en: ¡ignorar el desarrollo agrario inclusivo es peligroso! Dentro del contexto de un entorno deshabilitador de políticas, si no se satisfacen las demandas de sectores populares con tierra y empleo, se producirán diferentes formas de resistencia, con la posibilidad de que se desarrolle actividad delictiva y que se desarrollen formas dispersas de conflicto violento que dificulten la capacidad para gobernar de forma efectiva.

En relación a las cooperativas ellas fueron objeto de numerosas presiones y restricciones que provocaron respuestas contradictorias. Por una parte, muchas fueron destruidas y, por otra, un gran número de productores y trabajadores se embarcó en una serie de acciones colectivas e innovaciones sociales y productivas, que involucraron prácticas organizativas, de gestión y sociales no sólo como una estrategia para superar los problemas, sino también como un camino hacia el empoderamiento político y económico.

El resultado de estas iniciativas llevó a que el movimiento cooperativo actuara como un freno parcial a la reestructuración neoliberal, que tenía como objetivo fundamental modificar la correlación de fuerza en las áreas rurales y desmantelar la reforma agraria sandinista. Además, las cooperativas cumplieron un papel positivo en el proceso de reconciliación. Según el actual líder del movimiento cooperativo y ex-Ministro de Agricultura en el gobierno Sandinista (después de 2007):

> "Sin el movimiento cooperativo, la alianza con la Contra no habría sido posible. Este (movimiento) fue la fuerza organizada del campesinado. Fue el movimiento cooperativo el que puso un alto a las invasiones de tierras e hizo posible la concertación política." (Entrevista a Ariel Bucardo, 2014).

El movimiento cooperativo también constituyó un terreno fértil para la innovación social y productiva. Durante los 90 se constituyó un movimiento cooperativo más autónomo con las organizaciones cooperativas de segundo y tercer grado. Tal innovación facilitó el acceso a los servicios básicos y la defensa de la tierra, en el contexto de la reemergencia de las fuerzas del mercado y la crisis económica y social, vinculadas a las fallas del Estado y del mercado, la desintegración social y la disminución de los precios internacionales de los productos primarios. También ayudó a que las cooperativas se posicionaran mejor en las cadenas de valor, desde la perspectiva del comercio y el valor agregado. Esto mismo también permitió su empoderamiento político a través de la formación de una estructura integrada de organizaciones lo que facilitó la representación y defensa de los derechos.

Después de tres décadas, el sector cooperativo ha transitado de ser una masa de entidades de primer grado que, en gran media, eran un proyecto del Estado, a un movimiento estructurado que tiene más voz, autonomía y capacidad organizativa. Este desarrollo permitió que el movimiento cooperativo se encontrara en una buena posición

cuando el FSLN tomó nuevamente el poder en 2007. Sus líderes llegaron a ser ministros, alcaldes y legisladores; el programa Hambre Cero adquirió carácter nacional y prioritario y nuevamente las cooperativas accedieron al crédito.

Pero la integración del sector cooperativo y su autonomía permanecen como temas aún por resolver. Durante más de tres décadas existió el problema de la inexistencia de una organización que represente efectiva y exclusivamente los intereses de las cooperativas agropecuarias. En los años 80s, los intereses de las cooperativas se habían acomodado en la ATC-UNAPA y la UNAG, cuyos miembros principales lo constituían otros grupos, trabajadores rurales y productores individuales, respectivamente. En los 90 se crearon varias asociaciones de tercer grado que representaban intereses sectoriales dentro de la esfera cooperativa. Y cuando el gobierno sandinista regresó al poder en 2007, se conformó la CONACOOP gracias a la legislación promulgada en 2005. Ello fue un respiro de aire fresco para el movimiento. El nuevo gobierno apoyó en general al movimiento, pero ni la CONACOOP, ni las asociaciones de tercer grado estaba suficientemente organizadas o unidas para tomar una representación proactiva que formulara propuestas y reclamos al Estado. El resultado fue el problema clásico de obsecuencia de las asociaciones cooperativas con los regímenes que las apoyaban.

El movimiento cooperativo esperaba, y a menudo recibía del Estado y de la cooperación sur-sur vinculada a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Pero como Ariel Bucardo, destaca:

> "el (nuevo) gobierno abrió las puertas al cooperativismo, pero el movimiento no pudo sacar todas las ventajas posibles de esta situación. Todo vino de arriba. La organización local y el cabildeo se enfriaron." (Entrevista a Ariel Bucardo, 2014)

Organizaciones cupulares como la CONACOOP fueron débiles y las divisiones políticas entre las federaciones afectaron la cohesión del movimiento. Cuando las condiciones del mercado y el apoyo estatal los desfavorecieron, luego de varios años de gobierno sandinista, el movimiento estaba mal preparado para defender sus derechos y beneficios ganados.

La trayectoria irregular del movimiento cooperativo seguía cuando se creyó el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCCA. El Ministerio absorbió al INFOCOOP, lo que produjo preocupación respecto a la posible burocratización del proceso de desarrollo del movimiento y marginalización de la rama cooperativa dentro del nuevo 'super' ministerio. También socavaron la capacidad del gobierno para llevar a cabo algunos programas las restricciones fiscales y las tensiones entre el Estado y algunos sectores de ONGs. Tomo varios años antes de que la MEFCCA pudo consolidarse en un ministerio que atiende a los intereses de los actores de la economía social.

Hoy en día el CONACOOP está integrado con el MEFCCA y participa a nivel nacional en mesas sectoriales con el Estado y productores grandes. Esto se debe en parte a la recuperación de la autonomía del movimiento cooperativo. En 2014, algunos ex-líderes del movimiento dejaron el gobierno y volvieron a asumir puestos de liderazgo. El movimiento reconoció que había sido demasiado dependiente del Estado. Necesitaba tomar la iniciativa en elaborar proyectos de ley y políticas, reforzar la incidencia y el dialogo sobre políticas públicas y su implementación, renovar la autonomía del INFOCOOP, activar la CONACOOP, establecer organizaciones superiores

(Confederación) y actuar de forma más proactiva en la lucha por sus derechos. A finales de 2014, se organizaron elecciones para elegir la junta directiva del CONACOOP y a principios del 2015 comenzaron a organizarse los consejos departamentales para conformar un movimiento cooperativo estructurado a nivel local, departamental y nacional. Se ha logrado que CONACOOP sea reconocido como parte interesado, junto con el Consejo que representa a la empresa privada (COSEP), en algunos de los foros de dialogo sobre política gubernamental.

El movimiento cooperativo también fue afectado cuando una de sus federaciones, la FENACOOP, fue intervenida en 2015 por quejas de la cooperación internacional sobre manejo de fondos. Hoy, el movimiento está consciente que si no logra estructurarse como una fuerza integrada y consolidada corre el riesgo de sucumbir a las fuerzas del mercado. También reconoce que su papel en la definición de políticas puede ser minimizado por las empresas agroindustriales transnacionales y los productores grandes nacionales que se encuentran organizados y presionan por definir políticas estatales a su favor. Mientras está por verse si el movimiento puede convertirse en una fuerza de cambio duradera, lo que queda claro es que a lo largo de tres décadas ha jugado un papel importante frenando los impactos regresivos de la agenda neoliberal y fomentando el desarrollo económico del país y la reconciliación política y social

Entrevistas

Ariel Bucardo, anterior Ministro del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), fundador de UNAG y FENACOOP, y actual Presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), abril 2014

Orlando Núñez, Asesor del Presidente (de Nicaragua) para Asuntos Sociales, Presidente de CIPRES, y diseñador del programa '*Hambre Cero*', mayo 2014.

Jorge Flores, Asesor del Ministro del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), enero, 2014

María Teresa Fernández, Presidente de la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), abril 2014

Ricardo Pereira, mayor del Ejército Sandinista retirado; especialista en métodos de resolución de conflicto, mayo 2014.

Pedro Huerta, anterior líder del Frente Unido Andrés Castro, presidente de la Federación de Dueños de Bosques de Nicaragua (FEDUBONIC), junio 2014

Bibliografia

Bacon, Christopher. 2013. "Quality Revolutions, solidarity networks, and sustainability innovations: following Fair Trade coffee from Nicaragua to California." *Journal of Political Ecology*, Vol. 20.

Bacon, Christopher. 2010. "Who decides what's fair in fair trade? The agri-environmental governance of standards, access, and price." *The Journal of Peasant Studies* 37(1): 111-147.

Bacon, Christopher. 2005. "Confronting the coffee crisis: can fair trade, organic, and specialty coffees reduce small-scale farmer vulnerability in northern Nicaragua?" *World Development*, *33*(3), 497-511.

Bacon, C., Mendez, E., Flores Gomez, M.E., Stuart D. and S.R. Diaz Flores. 2008. "Are Sustainable Coffee Certifications Enough to Secure Farmer Livelihoods? The Millennium Development Goals and Nicaragua's Fair Trade Cooperatives." *Globalizations*. Vol. 5, No. 2:259-274.

Bacon, C., Sundstrom, M.E., Flores, W., Mendez, Santos, R., Goldoftas B., and I. Dougherty. 2014. "Explaining the 'hungry farmer paradox': Smallholders and fair trade cooperatives navigate seasonality and change in Nicaragua's corn and coffee markets." *Global Environmental Change*, 25: 133-149.

Bateman, M., and H. Chang .2012. "Microfinance and the Illusion of Development: From Hubris to Nemesis in Thirty Years." *World Economic Review*, 1: 13-36.

Baumeister, Eduardo. 1998. *Agrarian structure and reform in Nicaragua (1979-1989)*. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Universidad Libre de Amsterdam.

Baumeister, Eduardo. 1999. "Las Iniciativas Campesinas y la Sostenibilidad de los Resultados de la Reforma Agraria en El Salvador, Nicaragua y Honduras." Discussion Paper No. 105, June. UNRISD: Geneva.

Blanco, A. 1998. *Reconversión del movimiento cooperativo en Nicaragua*. Reconversión en Marcha, CCC-CA: Managua.

Cáceres Baca, S., Barberena, E.J.V., and J.A.C Hernández. 2011. *Análisis de la implementación de la Ley No.693 y su coherencia con las políticas y programas que implementa el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales*. FENACOOP: Managua.

Chamorro, Amalia. 2007. *Diagnóstico de la Economía Social en Nicaragua*. Centro para la Economía Social (CES), Alianza International Cooperativa para las Américas: San José.

CIERA (Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria). 1989. *La Reforma Agraria en Nicaragua 1979-1989: Estrategia y Políticas*. Vol. 1. CIERA: Managua.

CIPRES (Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural Social). 2006. *Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios: Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agroindustrial*, Vol. 1. CIPRES: Managua.

CIPRES. 1995. *Experiencias Autogestionarias en el APT*. Cuadernos del CIPRES No. 18. CIPRES: Managua

CIPRES.1993. *Organización y Gestión Empresarial en el APT*. Cuadernos del CIPRES No. 15. CIPRES: Managua.

CIPRES. 1992. *El Area Propiedad de los Trabajadores: Una Nueva Forma de Propiedad Social en Nicaragua*. Cuadernos del CIPRES No. 10. CIPRES: Managua.

Cordero V., and R. Pereira. 1992. "Recompas y Recontras ponen fin a la Guerra." *Avispa*, No. 8: 23-31, enero/febrero.

Damiani, Octavio. 1994.*Collective responses to crisis: agricultural cooperatives and intermediaries in post-Sandinista Nicaragua.* Massachusetts Institute of Technology, Department of Urban Studies and Planning. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/27293683/Collective-responses-to-crisis-agricultural-cooperatives-and-intermediaries-in-the-Post-Sandinista-Nicaragua. Accedido 9 june 2014.

Ekta Parishad et al. 2013. *Memoria del seminario "La Lucha por la Paz y la Construcción de una Economía Alternativa"*, Ekta Parishad, International Initiatives, CES, CIPRES, diciembre 2013, CIPRES: Managua.

END (El Nuevo Diario). 2011. "Tenemos derecho a ser la cooperativa más grande del país." 4 julio.

Encuentro. 1987. "El Movimiento Cooperativo Nicaragüense: Nacer en medio de Fuerzas Hostiles." Número 30, enero-abril.

Enriquez, Laura. 1991. *Harvesting Change: Labour and Agrarian Reform in Nicaragua, 1979-1990*. University of North Carolina Press: Chapel Hill.

Envio.1995. "*Nicaragua: Noticias del* Mes." *Envio* No. 161, julio. Universidad Centroamericana: Managua.

Envio. 1992. "Los Revueltos: Estallido Social o Chantaje Político." *Envio*. No. 126, mayo. Universidad Centroamericana: Managua.

Envio. 1989. "La Organización Campesina: cimiento de la nueva Nicaragua." *Envio*. No. 83. mayo. Universidad Centroamericana: Managua.

Equal Exchange. sin fecha. *History of Coffee in Nicaragua* http://equalexchange.coop/history-of-coffee-in-nicaragua.

Fauné, María Angélica. 2014. "Deceit, disappointment and anger are again accumulating in Nicaragua." *Envio* No. 394, mayo, Universidad Centroamericana: Managua.

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola).1987 . "Apuntes Sobre el Programa de Desarrollo Cooperativo." *Encuentro, 30*, 61, 93-108.

Fitzgerald, V., & A. Chamorro. 1987. "Las cooperativas en el proyecto de transición en Nicaragua." *Encuentro, 30*, 21-46.

Goodman, D., E.M. DuPuis and M. Goodman. 2012. *Alternative Food Networks: Knowledge, Practice, and Politics*. Routledge: Abingdon.

Grupo Venancia. 2015. *"Hambre Cero: cómo les va a las mujeres?"* Envio, No. 396, marzo

Grupo *Cívico* Ética y Transparencia. 2014. *Informe Final 'Medición de Eficiencia y* Transparencia en Programas Estatales. Managua: Grupo Cívico Ética y Transparencia/Transparency International

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). 2011. *Hambre Cero: Avances y Desafíos*; Tercer Informe de Evaluación del Programa Productivo Agropecuario. Managua: IEEPP.

INRA Capacitación.1980. *La Reforma Agraria Sandinista*. INRA: Managua.

Jonakin, J. 1996. "The Impact of Structural Adjustment and Property Rights Conflicts on Nicaraguan Agrarian Reform Beneficiaries." *World Development*, Vol. 24 (7):1179-1191.

Kester, P. 2009. *Informe evaluativo (2007-2008) Programa Productivo Alimentario (PPA) 'Hambre Cero'*. Managua: Embajada del Reino de los Países Bajos.

Larracoechea Bohigas, Edurne. 2011. *¿Ciudadanía Cero? El Hambre Cero y el empoderamiento de las mujeres. Los casos de Matiguás, Muy Muy y Río Blanco***.** Matagalpa: Grupo Venancia.

MAGFOR, MEFCCA, INTA & INAFOR. 2013. *Prorural Incluyente. Informe de Avance 2012*. Managua.

Merlet, M., & C. Maldidier. 1987. "El movimiento cooperativo, eje de la sobrevivencia de la revolución." *Encuentro, 30*, 47-72.

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). *Programa Hambre Cero*. Disponible en: http://www.economiafamiliar.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=672&Itemid=228

Nitlapán. 1994. "Descolectivación: reforma agraria 'desde abajo'." *Envio*, 154: 17-23.

Núñez, Orlando. 2015. *El Metabolismo del Mercado: Regulación-Socialización-Desmercantilización*. Anamá: Managua.

Núñez, Orlando. 2009. *La Revolución Rojinegra*. CIPRES: Managua.

Núñez, O., Cardenal, G., Lorío, A., Agurto, S., Morales, J., Pasquier, J., & Pasos, R. 1995. *La guerra y el campesinado en Nicaragua*. CIPRES: Managua.

Ortega, Marvin. 1987. "El Cooperativismo Agrario en Nicaragua." *Encuentro, 30*, 73-92.

Pereira, Ricardo. 2006. *Conflicto y café: Rol de la Iglesia Católica de Nicaragua en la construcción de la paz. Sistematización de la experiencia de mediación en el conflicto de Las Tunas, Matagalpa*. CRS, Editarte: Managua.

Pereira, Ricardo. 2013. "Lucha por una alternativa en el agro cafetalero. Manejo del conflicto: el caso Las Tunas. Nicaragua". Presentación realizada en el taller La Lucha por la Paz y la Construcción de una Economía Alternativa, organizado por Ekta Parishad, International Initiatives, CES and CIPRES, Managua, 16-18 diciembre.

Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. Beacon Press: Boston.

Reed, Darryl. 2012. "Fairtrade International." En Reed D., Mukherjee-Reed A. y P. Utting, *Business Regulation and Non-State Actors: Whose Standards? Whose Development?* Routledge: Abingdon: UK.

Rocha, José Luis. 2010. "Nicaragua: A 31 Años de la Revolución: La contradictoria herencia de la reforma agraria Sandinista." *Envio*, 340, Universidad Centroamericana: Managua.

Rocha, José Luis. 2001. "Breve, necesaria y tormentosa historia del FUAC." *Envio* 232, julio, http://www.envio.org.ni/articulo.php?id=1089.

Ruben R. and Lerman 2005. "Why Nicaraguan Peasants stay in Agricultural Production Cooperatives." *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, 78, abril 2005.

Ruben, R. and E. Masset. 2003. “Land Markets, Risk and Distress Sales in Nicaragua: the Impact of Income Shocks on Rural Differentiation.” *Journal of Agrarian Change*, Vol. 3, (4):481-499.

Utting, P. 2012. *The Challenge of Political Empowerment*. UNRISD Think-Piece. UNRISD: Geneva. Available at http://www.unrisd.org/news/utting-empowerment

Utting, P. 1992. *Economic reform and Third-World socialism: a political economy of food policy in post-revolutionary societies*. Palgrave Macmillan: Basingstoke

Westphal, S.M. 2002. “When Change is the Only Constant: Coffee agroforestry and household livelihood strategies in the Meseta de los Pueblos, Nicaragua.” Tesis doctoral, Roskilde University.

Wilson, B. 2013. *Reclaiming the Worker’s Property: Coffee, Land Grabbing, and Farmworker Resistance in Nicaragua*. Land Deal Politics Initiative, cuaderno de trabajo 42.

World Bank. 2003. *Agriculture in Nicaragua: Promoting Competitiveness and Stimulating Broad-Based Growth*, Washington D.C.: World Bank